



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
TUNJA**

Tunja, cinco (05) de julio de dos mil dieciocho (2018).

MEDIO DE CONTROL:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
DEMANDANTE:	Sandra Milena Nausan Arciniegas
DEMANDADO:	Nación – Fiscalía General de la Nación.
RADICACIÓN:	15001 3333 004 2018 00092 00.

Visto el informe secretarial que antecede y revisado el expediente, se encuentra para resolver sobre la Admisión.

I. ADMISIÓN DE LA DEMANDA.

1. Medio de Control:

La señora **Sandra Milena Nausan Arciniegas** promueve demanda a través de apoderado, en contra de la **Nación -Fiscalía General de la Nación**, a través del medio de control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, con la que se pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio No. DS-25-12-4-168 de 10 de agosto de 2017 y las resoluciones Nos. 233 de 31 de agosto de 2017 y 23029 de 09 de octubre de 2017 mediante los cuales le fue negado el reconocimiento liquidación y pago de la totalidad del salario correspondiente al mes de noviembre de 2014 y la consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales.

Presupuestos del medio de Control:

2.1. Jurisdicción:

El artículo 104 C.P.A.C.A, dispone que la Jurisdicción Contencioso Administrativa esta instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

En el presente caso se debate la legalidad de actos administrativos expedidos por la Fiscalía General de la Nación, por tanto, esta Jurisdicción es la competente para realizar su control judicial.

2.2. De la Competencia:

El numeral 2° del artículo 155 del C.P.A.C.A., dispone que los jueces administrativos conozcan en primera instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de contrato de trabajo, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) S.M.M.L.V.

En este caso la demanda fue presentada el 24 de abril de 2018 (fl. 30), no obstante el demandante se abstiene de efectuar la estimación razonada de la cuantía, conforme lo señala el artículo 157 ejusdem, pues se limita a señalar que esta corresponde a tres (03) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin explicar cómo obtiene dicho resultado; **de manera que la demanda será inadmitida para que corrija este yerro y proceda a efectuar dicha estimación.**

Según el numeral 3° del artículo 156 del C.P.A.C.A., la competencia territorial, en los casos de nulidad y restablecimiento de carácter laboral, se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios, luego este despacho es competente para conocer de éste asunto, toda vez según se advierte en el escrito de demanda se desempeña como Técnico Investigador II de la Fiscalía General de la Nación Seccional Boyacá –Tunja (fl. 18)

2.3. De la reclamación en sede administrativa y de los actos demandados:

En primer lugar habrá que señalar que existe coincidencia entre lo solicitado previamente a la administración y la decisión que se cuestiona por vía judicial.

Revisada la demanda se observa que se encuentra agotado el procedimiento administrativo, toda vez que, se acusa el oficio DS-25-12-4-168 de 10 de agosto de 2017 (fl. 31-32), contra el cual procedían los recursos de reposición y apelación, este último interpuesto oportunamente y resuelto mediante resolución No. 23029 de 09 de octubre de 2017 (fls 36-46). Así las cosas, se entiende agotado el procedimiento administrativo de conformidad con el numeral 2 del artículo 87 y numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.

No obstante, se observa en el acápite de pretensiones que además de los actos que se acaban de señalar, se solicita la nulidad de la resolución No. 223 de 31 de agosto de 2017 *“por medio de la cual se concede un recurso de apelación”*, evidenciándose que, se trata de un acto de trámite que no es susceptible de control jurisdiccional, pues se limita - como se dijo- a conceder el recurso de apelación interpuesto para ser resuelto por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, es decir sin negar o reconocer derechos a demandante, por consiguiente sin producir efectos jurídicos, por el contrario limitándose a dar impulso a la actuación.

El artículo 43 del C.P.A.C.A, define los actos definitivos de la siguiente manera: *“Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.”*

Respecto a la norma transcrita y a los actos que son demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado ha sostenido:

“Así pues, un acto administrativo o acto definitivo es una declaración de voluntad, dirigida al ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es decir, que crea, reconoce, modifica o extingue situaciones jurídicas. Por su parte, los actos de trámite son los que impulsan un procedimiento administrativo sin que de ellos se desprenda una situación jurídica y, los actos de ejecución se limitan a dar cumplimiento a

una decisión judicial o administrativa¹, sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado.

De acuerdo con lo anterior, únicamente las decisiones de la Administración, producto de la conclusión de un procedimiento administrativo, o los actos que hacen imposible la continuación de esa actuación, siempre que afecten derechos o intereses, impongan cargas, obligaciones o sanciones o incidan en situaciones jurídicas, son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que, dicho de otra manera, significa que los actos de trámite y de ejecución se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que estos no deciden definitivamente una actuación.”² (Negrillas del Despacho)

De manera que el acápite de pretensiones debe ser modificado a fin de que **se acusen únicamente las decisiones administrativas susceptibles de control jurisdiccional**, esto es, las que decidieron el fondo del asunto.

2.4. De la caducidad de la acción:

El artículo 164 de la ley 1437 de 2011 numeral 1 literal c, dispone:

“La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(...) C. Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. (...)” (Subrayado fuera del texto)

El presente asunto se solicita el reconocimiento liquidación y pago de la totalidad del salario correspondiente al mes de noviembre de 2014 y la reliquidación de las primas, bonificaciones, vacaciones, prestaciones sociales y aportes a seguridad social integral en pensiones.

Frente a las prestaciones periódicas el Consejo de estado ha señalado que:

*“son aquellos pagos corrientes que le corresponden al trabajador, originados en una relación laboral o con ocasión de ella, que se componen de prestaciones sociales que son beneficios para cubrir riesgos del empleado y no sociales como el pago del salario, **pero que una vez finalizado el vínculo laboral las denominadas prestaciones periódicas dejan de serlo**, salvo las correspondientes a la prestación pensional o una sustitución*

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Ligia López Díaz, providencia del 30 de marzo de 2006, Radicación número: 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784). Ver también sentencias del 15 de noviembre de 1996, exp. 7875, C.P. Consuelo Sarriá Olcos, del 9 de agosto de 1991, exp. 5934 C.P. Julio Cesar Uribe Acosta y del 14 de septiembre de 2000, exp. 6314 C.P. Juan Alberto Polo.

² CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013) Radicación número: 25000-23-37-000-2013-00264-01(20247).

pensional que pueden ser demandados en cualquier tiempo, aún después de culminado el vínculo laboral.”³

Más recientemente el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, refiriéndose al pronunciamiento en cita señaló:

“Dicho en forma breve, lo anterior lleva a la conclusión de que durante la existencia de la relación laboral, las prestaciones sociales y los salarios que se perciben tienen el carácter de prestación periódica hasta el momento en el que ocurre el retiro del servicio, pues a partir de aquí se convierten en prestaciones definitivas y, por ende, susceptibles de caducidad.” (Subrayas del Despacho).⁴

Así las cosas, como el sub judice trata sobre montos salariales no percibidos y la reliquidación de las pretensiones de la demandante con la inclusión de los mismos y teniendo en cuenta que la señora Sandra Milena Nausan Arciniegas es actualmente funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, es claro que sus pretensiones se dirigen al reconocimiento de prestaciones periódicas y en consecuencia no le son aplicables términos de caducidad, esto es, la demanda puede ser interpuesta en cualquier tiempo.

2.5. De la conciliación prejudicial

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, se adjunta constancia de celebración de audiencia del 22 de febrero de 2018 (folio 48) suscrita por el Procurador 46 Judicial II para Asuntos Administrativos, donde consta que se solicitó y agotó la etapa de conciliación extrajudicial, motivo por el cual se considera cumplido el requisito de procedibilidad del artículo 161 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011.

2.6. Del derecho de postulación

En el presente asunto actúa como apoderado judicial de la señora Sandra Milena Nausan Arciniegas, el abogado Wilson Yoban Benítez Escobar, portador de la T.P. 169.535 del C.S. de la J., a quien le fue conferido poder para actuar en legal forma visible a folio 1 del expediente, cuyo objeto coincide plenamente con el medio de control y las pretensiones aquí impetradas.

2.7. Del contenido de la demanda y sus anexos

Se cumple en éste caso con lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.

De igual forma, se anexa el poder conferido por el demandante (folio 1) y las copias de la demanda y sus anexos para la notificación de las partes, dando cumplimiento al artículo 166 de la Ley 1437 de 2011.

³ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00117-01(0798-13), Actor: OLIVERIO AGUIRRE OROZCO, Demandado: AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

⁴ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, Bogotá, D. C., doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 66001-23-33-000-2014-00098-01(0837-15), Actor: SERGIO ALONSO SÁNCHEZ MURILLO, Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL.

Por lo anteriormente expuesto, la demanda resulta inadmisibile por no reunir los requisitos legales, por lo que el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE:

PRIMERO.- INADMITIR la demanda presentada por Sandra Milena Nausan Arciniegas en contra de la Nación –Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- CONCEDER a la parte actora el término de diez (10) días, para que subsane los defectos señalados en la motivación.

La parte actora deberá allegar con el escrito de subsanación, copias del mismo, al igual que la subsanación **en medio magnético**, para que sean anexados a los respectivos traslados y al expediente, siendo estos necesarios para cumplir en legal forma con la notificación a la entidad demandada.

TERCERO.- RECONOCER personería jurídica al abogado Wilson Yoban Benítez Escobar identificado con C.C. N° 7.161.141 y T.P. 169.535 del C.S. de la J., como apoderado de la demandante, en los términos y condiciones del memorial poder obrante en folio 1.

Notifíquese y cúmplase.


LAURA JOHANNA CABARCAS CASTILLO
JUEZA

⁵CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA NOTIFICACIÓN POR ESTADO LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N° ³⁵ De Hoy 06 de julio de 2018 A LAS 8:00 a.m.
 FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO

⁵ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 06 de julio de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co.
Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario